

rea, insigne eclesiasticista e Arcivescovo emerito di Guayaquil, di cui l'A. si è giovato per la sua ricerca.

*José T. Martín de Agar*

Sandro GHERRO (ed.), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, CEDAM, Padova, 2003, p. 265.

El volumen recoge, en su primera parte, las intervenciones de S. Gherro, J. Llobell, N. Picardi, C. Consolo, G. Giacobbe, M. Lugato y G. Dalla Torre en la jornada de estudio celebrada bajo el mismo título en Roma, en la *Libera Università Maria Assunta*, el 13 de abril de 2002. La segunda parte del libro contiene, además de las precedentes sentencias italianas del Tribunal de Apelación de Florencia y de la Corte de Casación, la de 20 de julio de 2001 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa 30882/96 Pellegrini contra Italia (el texto original francés de la sentencia se puede leer en *Ius Ecclesiae*, 13 [2001], p. 859-871), que es la que ha llevado a la celebración de la jornada de estudio, por cuanto cuestiona la tutela del derecho de defensa en el proceso matrimonial canónico, concretamente en el proceso documental.

En dicha sentencia el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado italiano a una indemnización por el daño moral sufrido por la parte ac-

tora, como consecuencia del *exequatur* de la doble sentencia canónica de nulidad al que se llegó por un proceso documental canónico en el que se habría violado el derecho a un proceso justo.

Según esa sentencia de la Corte europea, los tribunales italianos estarían obligados a comprobar que los tribunales eclesiásticos hayan observado las exigencias del derecho a un proceso justo, que derivan del artículo 6 §1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, según el cual « toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley (...) »: unir el escrito de demanda a la citación de la parte demandada, informar del derecho a ser asistido por un abogado antes de llamar a la parte demandada a declarar ante el tribunal, dar a conocer todas las pruebas presentadas por la otra parte (en este caso, las declaraciones de tres testigos presentados en primera instancia por la parte actora) y el parecer del defensor del vínculo.

Es irrelevante, según la sentencia, que la causa de nulidad del matrimonio proceda de un hecho objetivo y no refutado por la parte demandada, ya que ésta no se hubiera podido oponer en cualquier caso. Corresponde sólo a las partes en causa decidir si una declaración de la otra parte o de los testigos

stione e valutati dall'Amministrazione (artt. 3 e 4). Per tale scopo si prevede anche la consulta delle confessioni ormai registrate.

A questo punto l'A. propone un concetto di fine religioso non limitato al culto e diffusione di un credo, ma comprendente anche altre attività assistenziali o culturali quali l'insegnamento, la beneficenza, la carità ecc., per lo meno quando l'ente appaia vincolato ad una confessione registrata. Si tratta poi sul carattere pubblico o privato degli enti religiosi prospettando il suo inquadramento nella categoria degli enti privati con finalità o utilità pubblica o sociale.

Il *Modus vivendi* sottoscritto con la Santa Sede nel 1937 costituisce un riconoscimento particolare della Chiesa e degli enti cattolici, benché entro il quadro delle norme generali valide per tutti i soggetti religiosi. Tuttavia il riconoscimento specifico delle diocesi, dei vescovi e sacerdoti come ministri, e i riferimenti a elementi tipici della Chiesa fanno sì che essa continui ad essere un punto di riferimento (certamente non rigido) per il riconoscimento delle altre confessioni.

Il terzo capitolo è uno studio sulla personalità giuridica nel diritto dell'Ecuador, del modo e dell'*iter* specifici per acquistare la medesima da parte degli enti religiosi. Il sistema vigente nell'ordinamento ecuadoriano per le corporazioni e fondazioni è quello della concessione, per Legge o per Decreto Presidenziale, che ha rilevanza costitutiva. Le organizzazioni reli-

giose sarebbero invece riconosciute a propria richiesta; con l'atto di riconoscimento esse vengono anche costituite persone nel diritto civile. Ma già si è detto che il riconoscimento implica la pubblicazione dello statuto dell'organo di governo e dell'amministrazione dei beni nonché la sua trascrizione nell'apposito Registro. È proprio questa che, secondo Baquero, ha valore costitutivo.

I seguenti paragrafi si dedicano allo studio delle caratteristiche del Registro Especial de Entidades Religiosas, il che ci conduce al problema della qualifica dei fini e quindi del carattere religioso di un ente: organo competente a farla, margini di discrezionalità, tipologie, ricorsi. I riferimenti alla dottrina spagnola e italiana sono assai abbondanti in queste pagine; difatti Baquero si colloca sulla scia di Finocchiaro quando sostiene che l'atto di qualifica dei fini può essere di portata sostanziale solo nel caso delle nuove confessioni, non invece in quello degli enti eretti o appartenenti ad una confessione ormai riconosciuta la quale ne certifica il carattere religioso.

La esposizione dell'argomento finisce con dodici punti conclusivi che riassumono in quattro pagine i suoi tratti salienti. Ad esse seguono la bibliografia e vari annessi contenenti la Ley de Cultos del 1937, il relativo Reglamento del 2000 e il *Modus vivendi* con la Chiesa cattolica altresì del 1937; nonché alcuni interessanti documenti appartenenti all'archivio di mons. J. Lar-

merezca ser rebatida. La confianza de las partes en los tribunales exige, entre otras cosas, que les sea asegurada la posibilidad de manifestar su parecer sobre todos los actos de la causa.

No basta, continúa el Tribunal, que el ordenamiento canónico conceda el derecho de ser asistido por un abogado en el proceso documental; la parte demandada debería haber sido informada, ya que los tribunales eclesiásticos podían presumir que no conocía ese derecho. La parte demandada debía haber sido informada de tal derecho y del objeto del contencioso en el momento de la citación, antes de la declaración de tal parte ante el tribunal.

Todas estas circunstancias, concluye la Corte de Estrasburgo, son exigidas por el derecho al proceso justo y, en cambio, no han sido suficientemente consideradas por los tribunales italianos que, al homologar la sentencia canónica, habrían violado el artículo 6 §1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Al margen de la perplejidad que podría producir la sentencia en cuanto interferencia indebida en las relaciones bilaterales entre el Estado italiano y la Iglesia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar la violación del derecho a un proceso justo, ha aplicado de un modo formalista principios que no son propios del proceso documental canónico. No ha considerado la naturaleza pecu-

liar de ese proceso, que tiene un objeto procesal limitado a la constatación documental de la nulidad del matrimonio en pocos casos bien precisos y constatables documentalmente.

Se basa el Tribunal en el artículo 6 §1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que, sin embargo, no se concreta, como parece entender la Corte, la presencia necesaria del abogado ni la obligación de informar a la parte sobre su derecho a servirse de él — derecho que conservó la parte recurrente en todo momento —. Sí que concreta, en cambio, el citado artículo, la necesidad de que la causa sea examinada «en un plazo razonable»: en el caso que nos ocupa, el juicio eclesiástico (en sus dos grados) se ha concluido en poco más de cinco meses, mientras que el juicio italiano de *exequatur* (también en dos grados) y el llevado a cabo ante el Tribunal Europeo (en un único grado) se han llevado a cabo, cada uno, durante más de cinco años.

Parece un poco forzado afirmar que la falta formal en la citación canónica de la declaración del derecho a servirse de un abogado haya comprometido irremediablemente el derecho de defensa de la recurrente. Aun cuando pudiera ser deseable que los tribunales eclesiásticos informen a ambas partes de su derecho a un abogado, hay que tener en cuenta que la mera diferencia de regulación procesal no puede ser un obstáculo a *exequatur* si no consta una viola-

ción del derecho de defensa en sus aspectos y requisitos esenciales.

No ha tenido en cuenta además el Tribunal la reciente normativa europea. Nos referimos al Reglamento 1347/2000, en vigor en la fecha de publicación de la sentencia, que ha sido sustituido por el Reglamento 2201/2003. Se establecía en aquél la necesidad de respetar los Tratados internacionales firmados con la Santa Sede y se incluyen, entre las decisiones matrimoniales que tendrán eficacia en los demás países europeos, las sentencias canónicas de nulidad homologadas civilmente. No existe en dichos Reglamentos ninguna referencia a las garantías de defensa tal como las ha concretado el Tribunal entre los motivos para denegar el reconocimiento de resoluciones.

Se hacía por tanto necesario profundizar en la naturaleza y peculiaridades del proceso documental canónico, cuya resolución puede ser sólo a favor de la nulidad pues si el documento no provoca la evidencia en el ánimo del juez, éste debe abstenerse de juzgar y enviar la causa al examen ordinario al tribunal de primera instancia, el cual deberá aplicar todas las formalidades procesales. La ley canónica limita por tanto el objeto del proceso y simplifica las formalidades, respetando el contradictorio que queda limitado al objeto típico de este proceso: la existencia del documento por el que consta con certeza la causa de nulidad que, en el caso que dio lugar a la sentencia

en cuestión, fue plenamente confirmado por las partes (impedimento de consanguinidad y ausencia de dispensa).

Las intervenciones recogidas en el presente volumen no se limitan al comentario y crítica de la sentencia europea, que el profesor Gherro analiza desde la perspectiva del derecho canónico poniendo en evidencia que las «situaciones jurídicas» sobre las que ha intervenido la Corte europea no pueden considerarse para nada como proyección o como reflejo de normas o de principios del proceso documental canónico y cómo, al contrario, los principios de los que es portador tal proceso aparecen perfectamente concordes con los que el Tribunal de Estrasburgo debe tutelar. Otros estudios se centran en el instituto del contradictorio, en su evolución histórica (N. Picardi), en el derecho italiano vigente (C. Consolo) o en los procedimientos especiales (G. Giacobbe). Destaca el exhaustivo análisis de la jurisprudencia del Tribunal Apostólico de la Rota Romana que realiza J. Llobell, para constatar el efectivo respeto del principio del contradictorio y del derecho a un proceso justo.

Concluye las intervenciones la relación, de G. Dalla Torre quien, analizando las observaciones de la doctrina sobre la sentencia en cuestión, en un sentido y en otro, y sirviéndose con frecuencia de las relaciones precedentes de la misma jornada de estudio, denuncia la ausencia en Italia de una ley matri-

monial de actuación de las nuevas disposiciones del Concordato. En su opinión, la sentencia de Estrasburgo se encuadra en toda una jurisprudencia que, a veces, lejos de la lógica jurídica, se mueve no por la teórica exigencia de conformidad con los principios indelegables sino por concretas y comprensibles exigencias de carácter económico. Se trata de evitar que el recurso al juez eclesiástico de la nulidad o al juez civil del divorcio se base en intereses económico-patrimoniales y no en razones de conciencia y de presupuestos jurídicos y de hecho.

Se trata en definitiva de un libro de indudable interés tanto para el canonista como para el eclesiástico que, además de contener una crítica seria y exhaustiva a la sentencia europea, analiza el instituto procesal del contradictorio tanto en el derecho canónico como en el derecho estatal, considerándolo en el ámbito de las relaciones Iglesia-Estado.

*Enrique Cadelo de Isla*

Venerando MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Giuffrè Editore, Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, Milano, 2003, p. 204.

Negli ultimi decenni dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 sono stati

pubblicati diversi libri dedicati alle associazioni dei fedeli. Congressi, convegni e giornate di studio, e anche il lavoro di singoli canonisti ha dato luogo ad una vasta bibliografia sull'argomento, sintomo dell'interesse che suscita nella Chiesa il fenomeno associativo nonché della sua importanza.

L'elevato numero di monografie e anche la qualità di molte di esse rende più difficile poter elaborare dei contributi che possano diventare punto di riferimento nella dottrina e che aiutino lo sviluppo della scienza. Il libro di Venerando Marano, professore associato di Diritto Ecclesiastico dello Stato dell'Università degli Studi di Foggia, ha questo pregio: riesce a trovare una posizione rilevante nella bibliografia sul diritto di associazione nella Chiesa, perché ha saputo guardare in avanti, cercando di dare risposta, o almeno indicare alcune linee di tendenza sulle quali fondare una risposta, alle sfide che nascono dalle caratteristiche nuove del fenomeno associativo ecclesiale.

Questo elemento emerge in particolare nella trattazione che l'Autore fa dei movimenti ecclesiali, elemento fondamentale della «nuova stagione aggregativa» nella Chiesa. Date le loro caratteristiche, i movimenti non rientrano facilmente nelle configurazioni giuridiche tradizionali e in quelle presentate dal nuovo codice. Cosa fare? Quale risposta dare? Pur essendo presenti in tutta la monografia, nel capitolo terzo, «Le nuove forme aggregative: i movimenti ecclesiali fra di-

menzione associativa e dimensione carismatica», emergono i seguenti tratti distintivi del lavoro del professore di Foggia: una profonda conoscenza del Magistero pontificio sull'argomento, della legislazione canonica, nonché della produzione scientifica in materia (canonica e teologica), e una sensibilità per la realtà giuridica che spinge sia a non incapsulare le nuove associazioni in tipologie chiuse che soffocherebbero il carisma, sia a non suggerire la preparazione di norme nuove quando il fenomeno è ancora in evoluzione. Ciò porta a Marano a esprimere opinioni sempre prudenti, perché si valutano i pro o contro delle diverse posizioni, senza esitare di fare valutazioni critiche di pareri espressi da altri autori. Manifestazione di questa sensibilità per il fenomeno associativo reale si trova nel ruolo fondamentale che si attribuisce al carisma nei movimenti. Una loro configurazione canonica potrà essere soddisfacente unicamente se l'elemento carismatico viene rispettato. Una risposta giuridica che lasciasse di parte la rilevanza del carisma rischierebbe di ingabbiare il fenomeno associativo in schemi rigidi e troppo formali. Le soluzioni devono essere flessibili e aggiustate alla realtà. È significativo che il Marano concluda il capitolo terzo con un richiamo all'«opportunità di non adottare soluzioni eccessivamente formalistiche e rigide, per evitare che nel proposito ricostruttivo resti forzata l'esperienza giuridica, in cui il fenomeno dei movi-

menti ecclesiali non appare ossificato ma caratterizzato piuttosto, insieme a punti fermi che si è cercato di illustrare, da elementi di intrinseco dinamismo che danno vita a una notevole varietà e novità di forme» (p. 145-146).

Prendendo spunto dalle sfide canoniche create dai nuovi movimenti ecclesiali ha un particolare interesse per superare le difficoltà e problemi emersi negli ultimi decenni quanto suggerito dall'A.: la comunione ecclesiale è la via per trovare una giusta configurazione dei movimenti nella Chiesa ed anche una loro giusta collocazione in essa. In tale valore si trovano le risorse per superare le tensioni fra istituzione e carisma: «il valore di riferimento rimane quello della comunione ecclesiale, nella quale gli stessi movimenti sono oggi chiamati alla sfida di una nuova maturità. In tale prospettiva comunionale trovano superamento le tensioni sempre possibili nell'effettività dell'esperienza, fra l'aspetto istituzionale e quello carismatico, di cui i movimenti sono una espressione significativa» (p. 132). Infatti alla luce della *communio* non solo l'inserimento dei movimenti nella Chiesa locale trova modalità più giuste ed equilibrate, che facilitano un mutuo rispetto e apprezzamento, ma anche acquistano un senso profondo provvedimenti per il discernimento e per il riconoscimento del movimento (cf. p. 133-146).

Da segnalare anche l'originalità e il valore del capitolo IV della mo-